



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE:	Beatriz Eugenia Ospina Galvis
DEMANDADA:	Colpensiones y Porvenir S.A.
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma y adiciona
Radicado	05001-31-05-004-2019-00468-01 (064) 05001310500420190046801

Medellín, a los cuatro (04) días de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

La **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación de Porvenir SA así como el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral adelantado que le sigue la señora Beatriz Eugenia Ospina Galvis a **Colpensiones y Porvenir S.A.**

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA.

I. ANTECEDENTES:

1.1 PRETENSIONES.

La señora Beatriz Eugenia Ospina Galvis presentó demanda en contra de Colpensiones y Porvenir S.A. buscando se declare la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS), disponiendo la reactivación automática de su vinculación al Régimen de Prima Media (en adelante RPM) sin

solución de continuidad; que se condene a Porvenir S.A. a trasladar a Colpensiones todos los aportes, rendimientos y cuotas de administración de su cuenta de ahorro individual, bono pensional; la indexación y las costas del proceso.

1.2 HECHOS.

Como respaldo de sus pedimentos manifestó que, nació el 20 de diciembre de 1969; se afilió al ISS el 13 de noviembre de 1993 y permaneció allí hasta el 27 de julio de 1994 (sic) cuando se trasladó al RAIS administrado por Horizonte S.A. hoy Porvenir S.A.; sin embargo, aduce que la entidad no le brindó la debida información acerca de las implicaciones de su traslado.

1.3 CONTESTACIÓN DEMANDADAS.

Admitida la demanda e integrada la litis, las demandadas allegaron respuesta oportuna, así:

Porvenir S.A., contradijo las pretensiones, alegando que, si brindó la debida información y para enervarlas formuló las excepciones de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y la genérica. En cuanto a los hechos, señaló que no le consta la edad de la actora, la fecha de afiliación al extinto ISS, la afiliación a Horizonte SA fondo, el agotamiento de la reclamación administrativa ante Colpensiones, el total de semanas cotizadas, la fecha de afiliación al RAIS, ni las afirmaciones que hablan de una indebida información.

Colpensiones, respecto a los fundamentos fácticos de la acción aceptó la fecha de nacimiento y la edad de la actora, su afiliación al ISS; los demás, dijo que no le constan por corresponder a situaciones ajenas a la entidad; en cuanto a las pretensiones se opuso su prosperidad, con el fin de debilitarlas presentó las excepciones de inexistencia de imposibilidad de traslado de régimen, improcedente de la declaratoria de ineficacia del traslado, devolución de cuotas de administración, prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva, equivalencia del ahorro, e imposibilidad de condena en costas.

1.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 23 de febrero de 2023, dispuso:

Primero: Declarar la ineficacia del traslado de la demandante, Beatriz Eugenia Ospina Galvis, identificada con cédula 43552728, que hiciera del entonces Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Porvenir SA para el día 1° de Mayo (sic) de 1994. En consecuencia, se genera el regreso automático al régimen solidario de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, entendiéndose que estuvo afiliado a dicho régimen de manera permanente y sin solución de continuidad.

Segundo: Condenar a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Porvenir SA, para que proceda la devolución de todas las sumas que recibió con ocasión del traslado de la demandante y con destino a Colpensiones, que la recibirá a su satisfacción y equivalencia dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firmeza de la decisión. Esta devolución integrada por los aportes y los rendimientos financieros causados en su totalidad, las cuotas o gastos de administración, **los pagos de seguro y reaseguro** y los pagos destinados garantía mínima, retornarán debidamente indexados a cargo del propio patrimonio de la entidad Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Porvenir SA, desde su causación hasta su pago a Colpensiones, el retorno a estos valores debe estar acompañado con la documentación que acredite detalles de ciclos y valores e información relevante para Colpensiones.

Tercero: Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, proceda a reactivar la afiliación de la demandante por cuenta de esa entidad en el régimen de prima media con prestación definida, brinde todas las garantías de la afiliación, reciba los valores de la cuenta de ahorro individual a satisfacción y equivalencia y ajuste el histórico laboral de aportes sin solución de continuidad.

Cuarto: Desestimar las excepciones de fondo mérito propuestas por Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Porvenir SA y por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Quinto: Condenar en costas a la parte vencida en juicio, Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Porvenir SA. Agencias en Derecho se pasan a favor de la parte demandante y que debe pagar Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Porvenir SA, a la demandante en \$2.500.000 pesos. No hay condena en costas ni a favor ni en contra de Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Sexto: Disponer el grado jurisdiccional de consulta a favor de Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, únicamente en caso de no presentar recurso de apelación.

1.5 RECURSO DE APELACIÓN.

Porvenir S.A. en su alzada solicita que se revoque la decisión, específicamente frente a la orden, que se le da a mi representada devolver las sumas debidamente indexadas, así lo argumentó:

En la SL 9316 del 29 de junio del 2016, se precisó que la indexación: “la simple actualización de la moneda para contrarrestar la evolución de la misma por el transcurso del tiempo, dada la generalizada condición inflacionaria de la economía”.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que entre las obligaciones que deben cumplir las apuestas de garantizar la rentabilidad mínima de las cuentas de ahorro individual de cada uno de sus afiliados, es incompatible y excluyente ordenar la indexación, pues los recursos de la cuenta de ahorro individual de la parte demandante no se han visto afectados por la inflación, por el contrario, se han generado rendimientos muy superiores a los que se garantizan en el régimen de prima media.

Me resulta ilustrativo traer a colación la sentencia del Tribunal Superior de Cali, con radicado 22562 del pasado 20 de enero del año en curso, donde se indicó: “respecto la indexación, la sala considera que no hay lugar a dicho imposición, toda vez que con el traslado de los rendimientos, se compensan la depreciación del poder adquisitivo de la moneda que pudiese

haberse generado esos movimientos a retornar. Por tal razón se revoca dicha condena a Colfondos y Porvenir”.

Luego entonces, ordenar que Porvenir indexe de cualquier suma de dinero es sin duda imponer una doble sanción, por cuanto sin razón alguna y sin que resulte necesario realizar ninguna operación matemática, los rendimientos financieros obtenidos por la gestión que adelantó mi representada a partir del acto jurídico informado que celebó la demandante cumplió los efectos jurídicos, pues supera con creces la posible pérdida del poder adquisitivo de los dineros de la afiliada, representados en los aportes pensionales. Es por estas razones que le solicitó entonces respetuosamente al Tribunal Superior de Medellín revocar la decisión en cuanto al numeral segundo de la sentencia y específicamente frente a la orden, que se le da a mi representada devolver las sumas debidamente indexadas.

ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Porvenir aduce que no están demostrados los presupuestos legales por los cuales deba declararse la ineficacia del acto de afiliación; que a la interesada le asistía el deber de estar informada, y debía esta indagar acerca de las características y condiciones de un traslado de régimen pensional; Que Porvenir le garantizó en todo momento, la posibilidad de retornar al régimen de prima medida y que el traslado simple y llanamente se materializó por la posibilidad de la libre escogencia que tenía la afiliada; Cuestiona también la imposición de la condena por indexación, la cual, considera se trata de una doble sanción a su representada.

Colpensiones esgrime como argumentos, que la entidad no incumplió ningún mandato constitucional, legal o reglamentario que le pueda ser endilgado; además que, el traslado efectuado por la actora fue voluntario, que cumplió con todos los requisitos de fondo y de forma para que surta validez.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO

Conoce la Sala de los recursos de apelación interpuesto por Porvenir y de la consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en los artículos 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala analizará, si estuvo acertada o no la decisión de primer grado al declarar la ineficacia del traslado de la demandante Beatriz Eugenia Ospina Galvis, con el

consecuente regreso al RPM administrado por Colpensiones, y, si es así, establecerá si las consecuencias de ese acto se estiman ajustada a la ley y la jurisprudencia.

3.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS

De acuerdo con el acervo probatorio arrimado, no hay duda que el demandante nació el 20 de diciembre de 1969 como se observa en su cédula de ciudadanía (folio 16 archivo 01ExpedienteDigitalizado), y se afilió al RPM hoy administrado por Colpensiones, el 18 de noviembre de 1993, como se infiere de la historia laboral expedida por Porvenir (folio 24 archivo01ExpedienteDigitalizado); y posteriormente se trasladó al RAIS administradopor Horizonte hoy Porvenir S.A. a partir del 1 de julio de 1994 (folio 109 archivo01ExpedienteDigitalizado).

3.4 INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

El primer aspecto es recordar que, según el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando un empleador o cualquier persona natural o jurídica, desconozca ese derecho, sea acreedor a las sanciones del inciso 1° del artículo 271 de la misma ley, de acuerdo con ella, cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quedará sin efecto.

Lo segundo es que, aunque la afiliación es libre y voluntaria, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de modo que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato.

Ahora, según el artículo 97, numeral 1° del Decreto 663 de 1993, las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar información necesaria y transparente a los afiliados, *«de suerte que les permita, mediante elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones informadas»*.

Por información necesaria, la Sala de Casación Laboral ha afirmado que comprende:

(...)la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones», y respecto a la transparencia, ha explicado que implica la obligación de dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, «los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de

los oferentes de servicios» (CSJ SL1452-2019, reiterada en SL1688-2019 y SL1689-2019).

El fondo de pensiones es responsable de proporcionar e indicar al usuario que pretende trasladarse de régimen, los elementos determinantes para tomar una decisión informada. En ese orden, el traslado no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la determinación de trasladarse de régimen pensional puede variar según la información que se brinde (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Por lo tanto, no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado en quien carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a sus circunstancias particulares, de manera que es insuficiente afirmar que el afiliado expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, cuando la administradora incumplió la obligación de brindarle la información necesaria, en obediencia a lo establecido en los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993.

Así, cuando el afiliado alega la falta de información o la mala entrega de esta por parte de la AFP, como ocurre en este caso, la administradora tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, por cuanto: *«la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo»* (artículo 1604 CC).

De tal manera que, al haberse indicado por la actora que *«nunca se le explicó a la señora Beatriz Eugenia Ospina Galvis las características de uno de los Regímenes»*, por tratarse de una negación indefinida, lo releva de probar ese hecho y a su vez, traslada la carga de la prueba en el demandado, quien deberá comprobar en contrario, es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado.

Así, se reitera que la carga de la prueba, sin importar la circunstancia particular del afiliado, está a cargo de las AFP, toda vez que: (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su

pleno cumplimiento, y (iii) no es razonable invertir la carga de la prueba en contra de la otra parte de la relación contractual, ya que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto al afiliado lego (CSJ SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019 y SL4426-2019).

En ese orden, la constatación de que se cumplió con el deber de información es ineludible, por lo que la simple firma del formulario de afiliación es insuficiente para acreditar el consentimiento informado del afiliado. Este es el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, en la sentencia SL19447-2017:

el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decidetrasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitudy trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisiónacarrea» (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021,CSJ3719-2021),

Ahora, el hecho de que el afiliado hubiese suscrito el formulario de vinculación o que en el mismo se empleen leyendas o afirmaciones tales como que «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares que suelen consignarse en los formatos preimpresos, no liberan a las AFP de su obligación de cumplir de manera rigurosa y de buena fe su deber de información. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).

Se insiste, que las AFP cumplan el deber de información y su acreditación en el proceso no se puede demostrar con las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado, pues ellas son insuficientes ya que quien debía probar la diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la administradora del fondo pensional (CSJ SL4964-2018).

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era Porvenir SA quien debía probar en el proceso que brindó una asesoría personalizada y completa al demandante al momento de su traslado, analizando las circunstancias particulares

de su caso.

Y, es que las AFP desde su creación, tienen el deber, de suministrar información objetiva, comparada y transparente sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, como de ello da cuenta el artículo 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, en armonía con el artículo 13, literal b) de la Ley 100 de 1993 (CSJ: SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464-2019, SL4360-2019, SL2611-2020, SL4806-2020 y SL373-2021).

Deben informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la L.100/93, actualizado con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, para que la misma sea realmente libre y voluntaria.

Y es que debe reiterarse que, la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “*deber del buen consejo*”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la medida que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 D.720/94- por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, si bien Porvenir S.A. afirmó al contestar la demanda que está siempre le brindó información clara, precisa y suficiente, por tal motivo al suscribir el formulario de afiliación fue producto de una decisión libre, espontánea e informada (folio 85 archivo 01ExpedienteDigitalizado), de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita, tenía la carga de acreditarlo, sin embargo, no aportó prueba que dé cuenta de la información realmente suministrada al demandante en ese momento, adicional que, como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de **la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado**

de régimen pensional, y no con posterioridad a aquel.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, esto es, el deber de información, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho pensional, trae como consecuencia la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de aquella como que el demandante nunca se trasladó al RAIS. Razón por la que en este punto se confirmará el numeral primero de la decisión examinada.

3.5 CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO.

La demandada Porvenir en su recurso, pide que no se imponga la obligación de devolver las sumas debidamente indexadas, teniendo en cuenta que los aportes pensionales no sufrieron la depreciación de la moneda, dado que estos generaron rendimientos financieros, inclusive mayores a los que pudieron generarse en el régimen de primera media con prestación indefinida, por ende, considera que imponerle la obligación de indexar estas sumas generaría una doble sanción contra esa administradora.

La declaratoria de ineficacia implica que las cosas vuelven al mismo estado en que se hallarían de no haber existido el cambio, esto es, se priva de todo efecto práctico al traslado *«bajo la ficción jurídica de que aquella nunca se trasladó al RAIS o, más bien, siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida»* (CSJ SL1689-2017).

Por lo tanto, considera la Sala que al declararse la ineficacia del traslado del demandante del RPM al RAIS, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que Porvenir S.A. traslade a Colpensiones no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, como ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667,

M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P Gerardo Botero Zuluaga.

Según el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, la Sala procede a aclarar el numeral segundo del fallo de primera instancia en cuanto ordenó que la devolución de las sumas se hiciera “a satisfacción y equivalencia”, perdiendo de vista que se está declarando la ineficacia del traslado, por lo tanto, no aplica la restitución a Colpensiones a satisfacción y equivalencia, como sucede en los casos en que el afiliado retorna al RAIS luego de trasladarse teniendo cumplidos más de 15 años de servicios, sino que debe el fondo restituir en su totalidad los aportes con sus rendimientos, los gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes y del fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados.

3.6 PRESCRIPCIÓN

No se llama a prosperar la excepción de prescripción por cuanto la acción sobre el traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con los requisitos y valor de la pensión, por lo que se debe predicar la imprescriptibilidad de la acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

Costas de segunda instancia a cargo de Porvenir SA y en favor del demandante por no prosperar el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000 pesos.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: Aclarar el numeral **Segundo** de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, el 23 de febrero de 2023 en cuanto ordenó que la devolución de las sumas se hiciera “a satisfacción y equivalencia”, perdiendode vista que se está declarando la ineficacia del traslado, por lo tanto, debe el fondo restituir en su totalidad los aportes con sus rendimientos, los gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes y del fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia revisada en apelación y consulta.

TERCERO: Costas de segunda instancia a cargo de Porvenir SA y en favor del demandante por no prosperar el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000 pesos.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ